**PROMUEVE AMPARO POR ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA SOBRE
CONDICIONES Y TÉRMINOS DEL EMPRÉSTITO CONTRAÍDO CON EL
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL**

Sra. Jueza:

Eduardo Manuel Murúa, DNI 14.615.048, tanto por derecho propio como en mi carácter de apoderado de la **Cooperativa 22 de Mayo de Trabajo Limitada**, con el patrocinio letrado de **Andrés Bernal**, T°90 F°455 CPACF y **Augusto Martinelli**, T°121 F°13 CPCAF, constituyendo domicilio procesal en Arias 2624 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y domicilio electrónico en 20343768134, a V.S. me presento y digo:

1. PERSONERÍA:

Conforme surge del poder que se acompaña, la cooperativa poderdante 22 de Mayo de Trabajo Limitada me ha otorgado suficientes facultades como para iniciar las presentes actuaciones. Asimismo, también ejerzo la presente acción por derecho propio y, a tales efectos, acompaño copia simple de mi documento nacional de identidad (ver documental nro. 1).

2. OBJETO:

Que vengo por el presente a interponer acción de amparo en los términos del art. 43 CN, la Ley N° 16.986 y la Ley N° Ley N° 27.275 y su Decreto Reglamentario N° 206/2017 contra el **Poder Ejecutivo Nacional**, con domicilio en calle Balcarce N° 50 de la Ciudad de Buenos Aires.

El objeto de esta pretensión es obtener **una sentencia que ordene a la demandada brindar información clara, completa, detallada, suficiente y oportuna** sobre las condiciones y los términos contractuales del empréstito público acordado con el Fondo Monetario Internacional (“FMI”).

Su fundamento, además de la normativa indicada, se asienta también en diversos pactos internacionales en la materia (Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención

Interamericana sobre Derechos Humanos), así como en la interpretación que de los mismos ha realizado nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación (“CSJN”).

3. INFORMACIÓN SOLICITADA:

3.1. Solicitamos a V.S. que ordene a la demandada entregar a esta parte el texto completo del contrato a ser firmado, memorando y carta de intención suscripta con el FMI y cualquier otra documentación complementaria del empréstito “credit stand by” suscripto con el FMI.

3.2. Solicitamos a V.S. que ordene a la demandada detallar las características financieras del acuerdo arribado: montos acordados, modalidad y plazo de desembolso de fondos, costos financieros (tasas de interés, cargos, prórrogas de jurisdicción, comisiones, aforos y toda otra información directamente vinculada con el empréstito contraído.

4. HECHOS Y CONTEXTO EN EL CUAL SE SOLICITA LA INFORMACIÓN REFERIDA EN EL APARTADO ANTERIOR:

4.1. El empréstito “credit stand by” suscripto por la República Argentina con el FMI:

Es un hecho de público y notorio conocimiento que el Poder Ejecutivo se encontraba negociando un empréstito de enorme magnitud con el FMI.

Además del monto histórico por el cual se suscribió dicho crédito (50 mil millones de dólares a devolver en 36 meses), **el punto más delicado de la situación se encuentra en la absoluta ausencia de información hacia la ciudadanía respecto de cuales son las condiciones** (“condicionalidades”) que dicho organismo internacional impuso a la República Argentina para concederle el crédito en cuestión.

Esta situación adquiere contornos aún más graves si tenemos en consideración que diversos funcionarios del Poder Ejecutivo, así como legisladores del oficialismo, han afirmado públicamente que el crédito en cuestión no será sometido a aprobación del Honorable Congreso de la Nación, en virtud de que la ley de administración financiera así lo permite, por ser Argentina miembro del FMI (art. 60, último párrafo, de la Ley N° 24.456).

Consideramos que una decisión en tal sentido por parte del Poder Ejecutivo resultaría inconstitucional ya que **dicho art. 60 de la LAF contraría abiertamente lo dispuesto por los arts. 4 y 75 inc. 4° y 7° de la CN**, los cuales establecen en lo pertinente lo siguiente:

*“Artículo 4°.- El Gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro nacional formado del producto de derechos de importación y exportación, del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de Correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General, y de los **empréstitos y operaciones de crédito que decreta el mismo Congreso para urgencias de la Nación, o para empresas de utilidad nacional**”.*

*“Artículo 75. **Corresponde al Congreso de la Nación (...) 4. Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación**”.*

*“Artículo 75. **Corresponde al Congreso de la Nación (...) 7. Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación**”.*

Tomar semejante deuda y asumir en nombre de toda la sociedad los respectivos compromisos a futuro, sin contar para ello con la aprobación de una ley específica del Congreso violenta el pacto constitucional.

Esto, sin embargo, **no resulta objeto de la presente acción.**

Lo señalamos aquí como dato de contexto, toda vez que si se pretende no discutir el tema en el Congreso debería, cuanto menos, permitirse una discusión pública en la sociedad sobre un tema que condicionará la suerte de esta generación y de las futuras.

Como V.S. imaginará, para dar esa discusión con un mínimo de seriedad y en el marco de una sociedad democrática, es esencial disponer de la información que petitionamos.

4.2. Las conjeturas iniciales sobre las condiciones del empréstito:

Tenga presente V.S. que durante las últimas semanas numerosos medios de comunicación audiovisuales, gráficos y radiales, analistas, políticos y ciudadanos han acordado al tema un espacio central en la discusión pública.

El problema es que todos ellos, sin excepción, se encontraban (y se encuentran) conjeturando e imaginando cuáles serán las consecuencias del crédito con el FMI **ya que nadie sabe, a pesar de que ya existe documentación oficial firmada, qué compromisos asumió el pueblo de la Nación para contraer el empréstito en cuestión.**

Entre otros ejemplos de esto puede verse:

4.2.1. Informe publicado por Clarín Digital en su sección Economía el 10.5.2018 donde se especula sobre las condiciones que exigiría el FMI para prestarle dinero a la Argentina. Link al informe: https://www.clarin.com/economia/podria-pedir-fmi-prestarle-plata-argentina_0_SkhSQnZRM.html (ver documental nro. 2).

4.2.2. Entrevista televisiva realizada por Santo Biasatti a Martín Redrado, ex director del BCRA, emitida por el canal Crónica TV el 9.5.2018. Link al video: <https://www.youtube.com/watch?v=Bk-aIDutfo4>. En el minuto 1 del video el periodista le consulta a Redrado sobre cuáles pueden ser los condicionamientos que imponga el FMI para concretar el préstamo cuya negociación anunció el gobierno nacional. Redrado responde acudiendo a los programas vigentes en otros países. (ver documental nro. 3).

4.2.3. Nota publicada en el diario Página12 el 12.5.2018. Link a la nota: <https://www.pagina12.com.ar/114213-un-anticipo-de-las-exigencias-que-se-vienen>.

Allí se observa que el analista Tomás Lukin tampoco conoce las condiciones del crédito y para intentar especular al respecto acude a un documento publicado por FMI el 11.5.2018. Link al documento “Perspectivas Económicas Regionales: Aprovechar el ímpetu” Mayo 2018.
<http://www.imf.org/~media/Files/Publications/REO/WHD/2018/May/Spanish/wreo0518s.ashx?la=es> (ver documental nro. 4).

4.2.4. Entrevista realizada por Marcelo Longobardi a Alfonso Prat-Gay emitida en el canal CNN en Español el 13.5.2018, donde el ex funcionario responde sobre las condiciones que podrían imponer los agentes del FMI para una ayuda financiera a la República Argentina. Nuevamente, solo sobre conjeturas. Link al video de la entrevista: <http://cnnspanol.cnn.com/video/argentina-prat-gay-fmi-prestamo-longobardi/> (ver documental nro. 5).

4.2.5. Entrevista realizada en el programa radial Lanata Sin Filtro a Martín Lousteau. Allí a partir del minuto 9:26, el entrevistado describe el desarrollo de una negociación con el FMI y prevé imposición de condiciones más o menos dañinas, lesivas y dolorosas. Una vez más, especulaciones y conjeturas ya que no se conoce públicamente cuáles serían esas condiciones. Link al vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=B-ukb8VSBME&t=592s> (ver documental nro. 6).

4.2.6. Nota publicada por El Cronista, el 13.5.2018 donde se especula sobre las condiciones que deberá cumplir el Estado argentino para acceder al financiamiento del FMI. Link a la nota: <https://www.cronista.com/economiapolitica/Alertan-que-el-acuerdo-con-el-FMI-traera-condiciones-sobre-las-cuentas-externas-20180513-0003.html> (ver documental nro. 7).

4.2.7. Nota publicada el 13.5.2018 en el sitio TN.com.ar de la periodista Marcela Pagano. La periodista relata la preocupación de empresarios argentinos sobre la situación económica y en particular sobre las condiciones que pueda imponer el FMI para otorgar ayuda financiera. Todos, una vez más, intentando adivinar lo que sucederá atento la falta de información oficial al respecto. Link a la nota: https://tn.com.ar/economia/empresarios-temen-que-las-condiciones-del-fmi-y-las-altas-tasas-lleven-una-recesion_868483. (ver documental nro. 8).

4.2.8. Entrevista al Economista Martín Guzmán del 27/5/2018 en La Política Online, donde se le pregunta sobre la posible pérdida de soberanía que trae aparejada la toma de deuda con el FMI y los intereses detrás de las negociaciones. Link a la entrevista: <http://www.lapoliticaonline.com/nota/113187-la-salida-que-se-eligio-para-la-corrida-profundiza-los-problemas/#galleryzoom.1> (ver documental nro. 9).

4.2.9. Columna publicada en Infobae el 31/5/2018 sobre las condiciones que podría exigir el FMI para la concesión del préstamo. Link de la columna: <https://www.infobae.com/economia/2018/05/10/cuales-serian-las-condiciones-del-fmi-para-prestar-usd-30-000-millones/>. (ver documental nro. 10).

4.3. Las conjeturas iniciales se confirman:

El jueves 7 de junio pasado el Poder Ejecutivo, representado por el Ministro de Hacienda de la Nación Nicolás Dujovne, y el BCRA, representado por su Presidente Federico Sturzenegger, anunciaron con beneplácito la firma de un acuerdo

para que nuestro país acceda a un crédito “stand by” por la suma, como adelantamos, de **cincuenta mil millones de dólares a devolver en 36 meses.**

En fecha 8 de junio de 2018 fue publicado por UDAP un informe donde se pretenden explicar los alcances del acuerdo y las condiciones impuestas a nuestro país, además de las implicancias presupuestarias consecuentes <http://udap.com.ar/index.php/noticias/41-comunicados-de-prensa/273-acuerdo-argentina-fmi>.

Un informe, como se observa, de muy difícil comprensión, además de que no está subido en ningún espacio visible del sitio web oficial del Ministerio de Hacienda de la Nación (ver documental nro. 11).

En su edición del mismo día -viernes 8 de junio de 2018, mañana en la cual se publicó la noticia del cierre del acuerdo con el FMI- el Diario La Nación nos informa del procedimiento seguido por el Poder Ejecutivo para suscribir el acuerdo (ver documental nro. 12). En una nota titulada **“Cronología de un programa gestado bajo extrema presión”** (<https://www.lanacion.com.ar/2142025-cronologia-de-un-programa-gestado-bajo-extrema-presion>) se detalla la secuencia de esa negociación: (1) *Contacto el 8 de mayo (...)*; (2) *Luz verde, 18 de mayo (...)*; (3) *Negociaciones técnicas (...)*; (4) *Los condicionamientos (...)*; (5) *Programa Nacional (...)* y (6) *La carta de intención... ”*.

A los efectos de este pedido de acceso a información pública, es importante destacar la explicación de los puntos 3 y 6 (resaltado agregado):

“(3) Negociaciones técnicas: Con el visto bueno del directorio, el equipo técnico de Dujovne y los técnicos del staff revisan los números de la economía, evalúan las raíces de la crisis, el contexto internacional, la necesidad de asistencia y comienzan a ‘colaborar’ en el diseño del acuerdo, que quedó plasmado en dos documentos: la Carta de Intención, que incluye la famosa y tan denostada ‘condicionalidad’ del organismo, y el Memorando de Política Económica y Financiera, el programa económico del gobierno”.

“(6) El proceso de negociación con los técnicos del staff del Fondo terminó en la redacción de una Carta de Intención que la Argentina elevó al directorio ejecutivo, que contiene el programa que el Gobierno se compromete a implementar a cambio de la asistencia financiera del Fondo. Como bien lo describe su

nombre, el documento es una ‘carta’ dirigida a Lagarde, con la ‘intención’ del país. La carta suele ir acompañada de un memorando con las políticas económicas que el país planea implementar, incluidas las reformas estructurales. Ese proceso ya terminó y el directorio decidió otorgar el crédito”.

Para ese entonces, el 7 de junio de 2018 el FMI ya había anunciado oficialmente la celebración del acuerdo con la República Argentina (ver documental nro.13). Link: (<http://www.imf.org/es/News/Articles/2018/06/07/pr18216-argentina-imf-reaches-staff-level-agreement-with-argentina> , resaltado agregado):

“El FMI anuncia un acuerdo a nivel del personal técnico con Argentina para un Acuerdo Stand-By de tres años por USD 50.000 millones. 7 de junio de 2018. Las autoridades argentinas y el personal técnico del FMI han alcanzado un acuerdo sobre un Acuerdo Stand-By de 36 meses que asciende a USD 50.000 millones (equivalente a aproximadamente DEG 35.379 millones o alrededor de 1.110% de la cuota de Argentina en el FMI). El acuerdo a nivel del personal técnico está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, que examinará el plan económico de Argentina en los próximos días. Las autoridades han anunciado la intención de girar contra el primer tramo del acuerdo, pero posteriormente tratarán el préstamo con carácter precautorio...”

Vemos entonces que de acuerdo a esta información oficial del FMI:

(1) Hay un proceso de negociación concluido “a nivel del personal técnico” del FMI.

(2) El Poder Ejecutivo ha arribado a “un Acuerdo Stand-By de tres años por USD 50.000 millones” (lo que La Nación llama “carta de intención” y de la cual dice “incluye la famosa y tan denostada ‘condicionalidad’ del organismo”).

(3) Hay un “Memorando de Política Económica y Financiera”, que como también nos explica La Nación es “el programa económico del gobierno”. Es, según el FMI en su comunicado oficial, “el plan económico de Argentina” que examinará en los próximos días.

Es nuestro derecho constitucional como ciudadanos de este país conocer los términos y condiciones precisas en base a las cuales se ha acordado endeudar al país.

La información pública solicitada por esta demanda urgente debe ser proveída por el Poder Ejecutivo.

4.4. Resumen:

De acuerdo con lo expuesto y la documental acompañada, entendemos que **nuestra pretensión es razonable, constitucional y fundada.**

La Nación Argentina contrajo un empréstito **bajo condiciones secretas**, que según adelantaron tampoco serán sometidas a discusión en el Congreso.

Condiciones que además, y en esto sí coinciden las especulaciones, conjeturas y la escasa y confusa información oficial al respecto, serán de extrema gravedad para la política económica del país en el futuro inmediato y en las décadas que vienen.

Es una obligación del Poder ejecutivo respetar nuestro derecho ciudadano a conocer, a saber qué es lo que se está jugando en esa mesa y cuál será el futuro de nuestra economía.

El Poder Ejecutivo debería poner esa información a nuestra disposición de oficio. Como no lo ha hecho y atento la gravedad y la urgencia del asunto, **es deber constitucional de V.S. ordenarlo.**

5. VÍA PROCESAL. IDONEIDAD DE LA ACCION DE AMPARO. INADMISIBILIDAD, INUTILIDAD E INEFICACIA DE CUALQUIER OTRA EN LAS ACTUALES CIRCUNSTANCIAS:

5.1. La inexistencia de vías alternativas

El artículo 43 de la CN prescribe que el amparo es admisible siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. Por lo tanto, la imposición o remisión a la tramitación de cualquier vía no judicial (por ejemplo, agotamiento o reclamo administrativo previo vinculado con la información que se solicita) sería inconstitucional. La norma es clara y no existe margen para interpretación alguna en contrario: las vías en competencia que excluyan la utilización del amparo deben ser judiciales.

Morello y Vallefín entienden en este sentido que *“El art. 43 de la Constitución introdujo modificaciones en este cuadro: (...) 2) La inexistencia de otros*

remedios sólo queda limitada a los judiciales. El art. 43 de la Constitución establece ahora como recaudo para la admisibilidad de esta acción '(...) que no exista otro medio judicial más idóneo (...)', tornando así inconstitucional la exigencia de transitar previamente las vías administrativas, y así lo ha considerado, tempranamente, la jurisprudencia que ha juzgado que la existencia de aquellos medios 'no puede ser hoy obstáculo para la admisibilidad de la pretensión'" ("El Amparo. Régimen Procesal" 5ta. edición, 2004).

Basterra, a su turno, señala que "la línea jurisprudencial sostenida en "Hidalgo de Feltan" robustecida en "Arenzon" y finalmente consagrada en "Bonorino Però", goza de excelentes estándares. En todas estas sentencias, el Alto Tribunal se ha pronunciado en contra de la exigencia del agotamiento de la vía administrativa, como requisito previo para la procedencia de la acción de amparo. Estas decisiones, sin duda constituyeron un importante antecedente, motivando a los constituyentes de 1994 a derogar expresamente este requisito; sancionando con innegable contundencia el texto del art. 43 primer párrafo. Justamente, el dispositivo constitucional descarta la posibilidad de que los amparos puedan ser rechazados por la simple existencia de otros remedios judiciales -salvo que sean más idóneos- o administrativos, tendientes a resguardar el derecho invocado. Lo que está en perfecta sintonía con el fin último del amparo; esto es, hacer cesar de manera inmediata el acto u omisión lesiva a un derecho fundamental".

Sobre estas premisas, es claro que supeditar el acceso a la información pública requerida al agotamiento de una instancia administrativa en general y, más aún, en las circunstancias del caso, es contrariar la razón de ser del derecho mismo y la sólida construcción de la CSJN en la materia (CSJN, A. 917. XLVI "Asociación Derechos Civiles el EN PAMI (dto. 1172/03) s/amparo ley 16.986", sent. del 4/12/12; C. 830. XLVI "CIPPEC e/ EN MO Desarrollo Social - dto. 1172/03 s/ amparo ley 16.986", sent. del 26/03/14; 591/2014 (50-G)/CS, "Garrido, Carlos Manuel e/EN - AFIP s/Amparo. Ley 16.986", sent. del 2/06/16, entre otros).

Como sostuvo el Máximo Tribunal: "se trata de información de carácter público, que no pertenece al Estado sino que es del pueblo de la Nación Argentina (...). De poco serviría el establecimiento de políticas de transparencia y garantías en materia de información pública si luego se dificulta el acceso a ella

mediante la implementación de trabas de índole meramente formal” (CSJN, C. 830. XLVI. “CIPPEC”, énfasis agregado).

La remisión a sede administrativa en los términos de los arts. 9 y conc. de la Ley N° 27.275 es una de ellas, especialmente teniendo en consideración el contexto en que acontece y la conducta de restricción al acceso y secreto general asumida por el propio Poder Ejecutivo.

A las sobradas razones para presumir la inutilidad del reclamo administrativo previo se suma la urgencia en el proveimiento de la información.

Por si queda alguna duda, cabe recordar que con cita de la CIDH la misma CSJN ha expresado que en materia de protección judicial del derecho al acceso la información en poder del Estado, se ha enfatizado *“ la necesidad de que exista un recurso sencillo, rápido efectivo para determinar si se produjo una violación al derecho de quien solicita información y, en su caso, ordene al órgano correspondiente la entrega de la información. Para ello se debe tomar en cuenta que es práctica corriente la negativa suministrar la información que se solicita las instituciones el silencio ante un pedido que la celeridad en la entrega de la información es indispensable en esta materia” (CSJN, A. 917. XLVI. “Asociación Derechos Civiles el EN PAMI (dto. 1172/03) s/amparo ley 16.986”, sent. del 04/12/2012, considerando 7°).*

5.2. El criterio de la CSJN y la CIDH. La efectividad de la vía:

Por regla, no corresponde exigir como condición de admisibilidad del amparo que la utilización de los remedios ordinarios genere un daño grave e irreparable. Ello contradice lo dispuesto en el citado art. 43 CN, la condición de vía especial y no excepcional del amparo y las reglas y estándares convencionales impuestos en términos de eficacia.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) en su artículo 25 regula expresamente el derecho de toda persona a *“un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención”*.

Según la propia Corte IDH, el artículo 25 *“es una disposición de carácter general que recoge la institución procesal del amparo, entendido como el*

procedimiento judicial sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por las Constituciones y leyes de los Estados Partes y por la Convención”.

De ese modo, la Corte IDH ha precisado que los procedimientos de hábeas corpus y amparo constituyen “*garantías judiciales indispensables para la protección de varios derechos cuya suspensión está vedada por el artículo 27.2 y sirven, además, para preservar la legalidad en una sociedad democrática* .

El acceso a la información pública es uno de tales derechos. Para reafirmar ello **basta con recorrer la jurisprudencia que la propia CSJN ha sentado, tanto en términos de legitimación como vía (los *leading case* en la materia son amparos y todos los requerimientos han sido discutidos bajo esa forma procesal).**

También enfatizó que es deber del Estado que el amparo sea una garantía idónea y efectiva. Idónea, para proteger la situación jurídica infringida, por ser aplicable a los actos de autoridad que implican una amenaza, restricción o violación a los derechos protegidos. Efectiva, conforme a los principios de concentración, celeridad, contradictorio, motivación y defensa. El objeto y fin de la Convención es la eficaz protección de los derechos humanos, por lo que la misma debe interpretarse de manera que le otorgue su máximo efecto útil.

En ese sentido, cuando la CADH establece que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales (art. 25), incorpora una condición reglamentaria que el artículo 43 de la CN no prevé específicamente. **De ese modo, el amparo debe constituir un remedio eficaz para la resolución en tiempo y forma del conflicto urgente planteado.** La efectividad está directamente vinculada a la posibilidad real de su interposición, trámite, resolución y ejecución en un plazo razonable a la gravedad del caso.

En el caso, el amparo es el medio útil, rápido, breve y expedito que permitirá proveer de información en tiempo oportuno para el ejercicio de los derechos individuales-colectivos vinculados, facilitando el contralor social-público.

5.3. Eventualmente, el amparo es el medio más idóneo entre los medios judiciales disponibles

Eventualmente, dentro de los medios judiciales en competencia, el amparo es el más idóneo. Ello así por tres razones:

(i) La idoneidad de la vía tiene que ver con el cumplimiento de los presupuestos del amparo. En autos se encuentran acreditados cada uno de los recaudos constitucionalmente impuestos. Por lo tanto, siendo una vía principal (y no subsidiaria), ello es recaudo suficiente para la admisibilidad de la vía.

(ii) Las restantes vías judiciales en competencia no relucen, por el tipo de conflicto planteado y sus características, la pretensión introducida, los derechos en juego, su vulneración patente y la necesidad de obtener una solución inmediata, como eficaces. El amparo es la vía más rápida, sencilla y eficaz para la resolución del conflicto en disputa.

(iii) La idoneidad del medio debe analizarse con relación al caso y sus circunstancias. Es decir, que su idoneidad estará directamente vinculada a la eficacia que detente y con que se opere para dar respuesta al conflicto urgente en concreto. Los carriles ordinarios no ofrecen un escenario ni medio apto para procurar un remedio expedito, sea por las condiciones generales en que se enmarca el conflicto (es el propio Poder Ejecutivo quien negocia el acuerdo y tiene premura en llevarlo adelante a cualquier costo) y/o las particulares del caso (simplicidad de la controversia, imposibilidad de aplazar su provisión como condición de ejercicio del derecho e inutilidad de respuestas futuras). En ese marco, los remedios ordinarios no son realmente idóneos para dar una respuesta útil en la remediación de la disputa. No pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios.

En ese sentido, la remisión a la tramitación a las vías ordinarias conllevaría un grave daño porque:

(i) Sometería la resolución del conflicto a un trámite ordinario, impropio para el tipo de derechos en juego y la urgencia de la situación. Este tipo de pretensiones requieren estructuras de discusión sencillas, que habiliten la obtención de respuestas jurisdiccionales expeditas y concretas. El proceso contencioso ordinario es una vía amplia, lenta e ineficiente a dichos fines.

Por ello, tampoco serviría la utilización del remedio ordinario con pretensiones cautelares. Por antonomasia, esas estructuras son contraproducentes

(socavan y violentan) la exigibilidad de esta clase de derecho-conflicto. No hay razón lógica ni jurídica para someter a una estructura de contradictorio ampliado una cuestión simple, con compromiso a derechos fundamentales de ejercicio urgente.

(ii) En línea con lo expuesto, el caso planteado no supone ni evidencia complejidad alguna: no hay cuestión de hecho, probatoria ni jurídica que exija amplia discusión y/o prueba, y es deber del Estado proveer la información solicitada (no hay controversia por tanto entre el derecho ciudadano de cara a la obligación jurídica estatal que buscamos hacer cumplir).

Este caso cuadra en las exigencias que la propia CSJN ha fijado en la materia: no se trata de una cuestión compleja en términos jurídicos, el marco cognoscitivo que brinda el proceso resulta suficiente por sí y para producir la prueba elemental que fuese necesaria y no se trata de una materia opinable que exija mayor amplitud de debate o prueba para la determinación del derecho en juego (Fallos: 303:419 y 422; 307:178).

(iii) Dicho sometimiento también sería lesivo porque desconocería la **tutela preferente del derecho a la información en juego y el deber calificado del Estado en la provisión de la misma como instrumento para una correcta rendición de cuentas**. Esto impone a todas las autoridades estatales y a los jueces en particular, adoptar medidas e interpretaciones que garanticen su plena actuación.

En el caso en concreto, negar la utilización de una vía expedita supone agravar la incidencia de la acción u omisión lesiva en el ejercicio del derecho a la información y su utilización.

En circunstancias como las de autos, donde está en juego el derecho mismo a la información pública como valor y bien público e insumo para el contralor social, la vía del amparo resulta un instrumento eficaz para concretar la protección reclamada. Ello, a fin de evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con tutela de orden constitucional-convencional. De allí que la acción de amparo sea particularmente idónea en materias como la de autos, donde se ponen en juego valores y pilares del sistema democrático.

(iv) Si bien el tiempo que insume el procesamiento ordinario no es un argumento por sí mismo para sostener la prevalencia del amparo, si lo es en relación a la urgencia en la reparación de un derecho fundamental.

En el caso en concreto ello es manifiesto: el ejercicio del derecho a la información en sí mismo y todos los vinculados (controlar efectivamente qué y cómo se está haciendo, para qué y que incidencia tendrá) no admite dilación. La provisión de información debe ser inmediata, efectiva y completa porque su utilidad y razón de ser es actual. No hay forma de ejercer el derecho en sí mismo ni los vinculados si la provisión se supedita a un trámite engorroso.

En esos términos, existe una situación de urgencia que compromete el ejercicio de este derecho que aparece como vital para todos los que se encuentran indivisible e interdependientemente vinculados, evidenciando la relación de necesidad, proporcionalidad y adecuación de medio a fin entre el cuadro de violación constitucional y el amparo como remedio (eficacia).

5.4. La amplitud de criterio sobre accesibilidad a información pública como la peticionada

Las decisiones de la CSJN en materia de acceso a la información pública a que nos hemos referido ya han sido sumamente amplias, tanto en relación a la legitimación como al amparo como medio idóneo. Más aún: los precedentes en la materia, todos, han tramitado como también señalamos por la vía del amparo. **Esto no es una afirmación dogmática sino una derivación lógica y jurídicamente correcta de la vinculación entre el tipo de derecho, su tutela y vía de protección** (CSJN, A. 917. XLVI “*Asociación Derechos Civiles el EN PAMI (dto. 1172/03) s/amparo ley 16.986*”, sent. del 4/12/12; C. 830. XLVI “*CIPPEC e/ EN MO Desarrollo Social - dto. 1172/03 s/ amparo ley 16.986*”, sent. del 26-03-14; 591/2014 (50-G)/CS, “*Garrido, Carlos Manuel e/EN - AFIP s/Amparo. Ley 16.986*”, sent. del 2/06/16, entre otros).

5.5. Cierre

Teniendo en consideración que la vía administrativa no puede ser impuesta como condición excluyente, **la ley de acceso a la información pública también reconoce la vía expedita (sumarísima) para la exigibilidad del derecho a la información pública**. Por consiguiente, el amparo resulta vía idónea, en consonancia con el criterio impuesto por el propio legislador.

En otro orden, la inexistencia de otra vía más apta es un hecho negativo, circunstancia que imposibilita su acreditación en forma directa. Dicha circunstancia debe ser expresamente ponderada por el juez, valorando positivamente que **esta parte alega y acredita en este escrito disímiles razones que explican y justifican la admisibilidad de la vía y/o, a todo evento, su prevalencia por sobre los restantes medios judiciales.**

Debemos considerar que los textos constitucionales y convencionales caracterizan al amparo como un remedio expedito, breve, sencillo, urgente y de pronta resolución. **En ningún momento el constituyente o convencional alude a que se trata de una vía excepcional.**

Imponer dicha condición sería un error. Primero, porque el amparo no es un proceso excepcional sino especial, como puede ser cualquier otro que prevé reglas específicas para su admisibilidad. Segundo, por las consecuencias asociadas a la atribución de esa condición. En particular, la restricción indebida de su operatividad, la reproducción de exigencias inexistentes e interpretaciones problemáticas o la asignación de carácter subsidiario.

Por tanto, invocar de manera dogmática, abstracta y general la existencia de otras vías no es un argumento suficiente para desechar el amparo. En todo caso, es responsabilidad de los jueces motivar adecuadamente porqué el amparo no es la vía idónea y los argumentos ofrecidos inconducentes en este caso en concreto, sopesando los elementos y argumentos expuestos y demostrando su sinrazón.

Además, cualquier tipo de condición interpretativa que contraríe la regulación constitucional o que, sin contrariarla directamente, desnaturalice, dificulte o entorpezca innecesaria o injustificadamente su ejercicio, debería reputarse irrazonable e inconstitucional. **Por ejemplo, aquella que limite la idoneidad del amparo para la exigibilidad de derechos fundamentales directos (información pública) e indirectos (participación).**

Negar la viabilidad del amparo como vía específica, urgente y simple para motorizar la obtención de información fundamental para el ejercicio del control social-público, supone contrariar las reglas y principios constitucionales-convencionales que imponen como deber cardinal del Estado la rendición de cuentas.

En contextos vinculados a compromiso del erario público, corrupción, administración fraudulenta u objeciones vinculadas, todas directamente relacionadas con el ejercicio actual, presente y futuro de derechos fundamentales, **el Poder Judicial debe realizar interpretaciones que potencien no sólo las vías de control sino que maximicen la transparencia y rendición de cuentas.**

La CSJN en “Garrido, Carlos Manuel e/ EN - AFIP s/ Amparo. Ley 16.986” (CSJN, 591/2014 (50-G)/CS, sent. del 2/06/16), sostuvo que *“el fundamento central del acceso a la información en poder del Estado consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan. En concordancia con ello, se afirmó que la información pertenece a las personas, no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a una gracia o favor del gobierno. Este tiene la información solo en cuanto representante de los individuos. El Estado y las instituciones públicas están comprometidos a respetar y garantizar el acceso a la información a todas las personas. (...) el Estado está en la obligación de promover una cultura de transparencia en la sociedad y en el sector público, de actuar con la debida diligencia en la promoción del acceso a la información, de identificar a quienes deben proveer la información, y de prevenir los actos que lo nieguen y sancionar a sus infractores”*.

6. LEGITIMACIÓN ACTIVA:

En base a la consolidada jurisprudencia de la CSJN sobre la materia, consideramos que nuestra legitimación para acceder a información pública requerida es innegable.

Nos referimos especialmente a la doctrina emanada de los casos “ADC c. PAMI”¹ (04/12/2012) y “CIPPEC c. Ministerio de Desarrollo Social”² (26/03/2014), corroborada en época todavía más reciente –a fines del año 2014- por otros dos precedentes a los cuales me referiré más adelante.

¹ CSJN en autos “Asociación Derechos Civiles c/ EN - PAMI - (Dto. 1172/03) s/ amparo - Ley N° 16.986”, sentencia del 04/12/2012.

² CSJN en autos “CIPPEC c/ EN - M° Desarrollo Social - dto. 1172/03 s/ amparo ley 16.986”, sentencia del 26/03/2014.

En “ADC c. PAMI” la Corte sostuvo, entre otras cosas, que *“la negativa a brindar la información requerida constituye un acto arbitrario e ilegítimo en el marco de los principios de una sociedad democrática e implica, en consecuencia, una acción que recorta en forma severa **derechos que son reservados -como se verá- a cualquier ciudadano**, en tanto se trate de datos de indudable interés público y que hagan a la transparencia y a la publicidad de gestión de gobierno, pilares fundamentales de una sociedad que se precie de ser democrática”* (considerando 7°).

Asimismo, la CSJN recordó el carácter de derecho fundamental (constitucional y convencional) de acceder a información pública como la que fuera requerida por esta parte a CUCICBA. En este sentido, en el considerando 8° de dicho precedente sostuvo que *“es menester recordar que el derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado expresamente por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (artículo IV) y por el artículo 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Corte Interamericana ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, a través de la descripción de sus dimensiones individual y social”*.

Esta fundamental decisión de nuestro máximo tribunal de justicia contiene numerosas citas y extensas transcripciones de tales pactos internacionales y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante la cual se fue interpretando su alcance. Nos remitimos a todas esas fuentes del derecho y las damos por reproducidas aquí, sin reiterarlas en honor a la brevedad.

Sólo subrayamos de entre las mismas, y pedimos a V.S. tenga especialmente en cuenta, la doctrina de la Corte Interamericana emanada del conocido caso “Claude Reyes y otros”. Sucede que en dicho precedente internacional se sostuvo que *“el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a “buscar” y a “recibir” “informaciones”, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo **ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla**, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la*

misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción. Su entrega a una persona puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla...” (CIDH, Caso “Claude Reyes y otros vs. Chile”, sentencia del 19 de septiembre de 2006, Serie C, 151, párr. 77).

Es la propia CSJN en “ADC c. PAMI” quien corrobora la relevancia de este precedente, señalando -luego de transcribir la cita efectuada hace un momento- que “*La sentencia de la Corte [“Claude Reyes”] fortalece como estándar internacional la idea de que este derecho corresponde a toda persona; es decir que la legitimidad activa es amplia y se la otorga a la persona como titular del derecho, salvo los casos de restricción (conf. párrafos 88, 89, 93, 94, 121, 122)*” (considerando 10°).

La Corte volvió a expedirse sobre esta cuestión en Marzo de 2014 al fallar en “CIPPEC c. Ministerio de Desarrollo Social”, un caso todavía más complejo que “ADC c. PAMI” ya que involucraba algunos datos personales cuya divulgación podría dar lugar a ciertos reparos.

Allí, sin embargo, la CSJN fue igualmente terminante en torno al tema que nos ocupa, sosteniendo –luego de sólidas y extensas citas y transcripciones de diversas fuentes del derecho a la información- que “*como puede advertirse, en materia de acceso a la información pública existe un importante consenso normativo y jurisprudencial en cuanto a que la legitimación para presentar solicitudes de acceso debe ser entendida en un sentido amplio, sin necesidad de exigir un interés calificado del requirente. En efecto, se trata de información de carácter público, que no pertenece al Estado sino que es del pueblo de la Nación Argentina y, en consecuencia, la sola condición de integrante de la comunidad resulta suficiente para justificar la solicitud. De poco serviría el establecimiento de políticas de transparencia y garantías en materia de información pública si luego se dificulta el acceso a ella mediante la implementación de trabas de índole meramente formal. Ello es así ya que el acceso a la información tiene como propósito coadyuvar a que los integrantes de la sociedad ejerzan eficazmente el derecho a saber, por lo que el otorgamiento de la información no puede depender de la acreditación de un interés legítimo en ésta ni de la*

exposición de los motivos por los que se la requiere” (considerando 12°, énfasis agregado).

Como fuera señalado, esta línea interpretativa en materia de legitimación procesal para requerir información pública fue plenamente corroborada por la CSJN en dos casos posteriores a los invocados hasta aquí, resueltos ambos el día 14/10/2014. En estas dos sentencias, y mediante breves desarrollos, el tribunal **terminó de confirmar que la acción judicial para solicitar acceso a información pública es una suerte de acción popular que puede ser promovida por cualquier ciudadano “sin necesidad de acreditar un interés o afectación directa”**.

En una de tales decisiones, dictada en autos “*Gil Lavedra c. IGJ*”,³ el tribunal señaló que la queja carecía de fundamentos suficientes y refirió que *“los jueces de la causa consideraron que el actor, en su condición de ciudadano, se hallaba legitimado para acceder a la información requerida en poder de la Administración demandada de acuerdo a lo previsto expresamente en el arto 6° del anexo VII del decreto 1172/2003, que confiere ese derecho a toda persona física y jurídica. El recurrente pretende confutar este argumento con la mera afirmación dogmática de que el actor interpuso la demanda exclusivamente en su carácter de diputado de la Nación y que como tal cuenta con “canales institucionales específicos” para acceder a la información que requiere. No refuta, sin embargo, el fundamento de la cámara según el cual su condición de diputado no le hace perder su calidad de ciudadano, ni tampoco se hace cargo de la jurisprudencia de esta Corte, conforme a la cual el derecho a solicitar información en poder del Estado corresponde a toda persona, sin necesidad de acreditar un interés o afectación directa; es decir, que la legitimación activa es amplia, de conformidad con el principio de máxima divulgación que rige la materia (ver Fallos: 335:2393 y sus citas, y el precedente C.830.XLVI “CIPPEC c/ E.N. – Min. de Desarrollo Social – dto. 1172/2003 s/ amparo ley 16.986”, del 26 de marzo de 2014)”* (énfasis agregado).

³ CSJN en autos “*Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo c/ Estado Nacional – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Inspección General de Justicia s/ amparo ley 16.986*”, sentencia del 14/10/2014.

La otra decisión a que me refiero fue tomada en “*Gil Lavedra c. Ministerio de Planificación*”,⁴ donde la CSJN se limitó a desestimar la queja remitiendo al criterio expuesto en la causa cuyo fundamento medular transcribí hace un momento.

No quedan dudas, entonces, de que esta parte se encuentra plenamente legitimada para accionar judicialmente con el objetivo de obtener la información pública requerida, toda vez que estos criterios jurisprudenciales, además, gozan ahora de expresa recepción en nuestro derecho positivo: “*Legitimación activa. Toda persona humana o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar y recibir información pública, no pudiendo exigirse al solicitante que motive la solicitud, que acredite derecho subjetivo o interés legítimo o que cuente con patrocinio letrado*” (art. 4 de la Ley N° 27.275).

7. LEGITIMACIÓN PASIVA:

El Poder Ejecutivo se encuentra directamente obligado a brindar la información requerida, sea directamente o a través de cualquiera de sus órganos o dependencias que se encuentre participando de las negociaciones con el FMI (conf. Art. 7 de la Ley N° 27.275).

8. LA PRESUNCIÓN DE PUBLICIDAD DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA:

Entre los precedentes de la CSJN que cabe aplicar al caso se destaca especialmente aquel recaído en el caso “*Giustiniani, Rubén Héctor c/ Y.P.F. S.A. s/ amparo por mora*” (Expte. N° CAF 37747/2013/CA1-CSI – CAF 37747/2013/1/RH1), del 10/11/15.

La CSJN se expidió allí revocando por mayoría (con disidencia de Highton de Nolasco) la decisión de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que, también por mayoría, había confirmado el rechazo de la acción de amparo promovida por un legislador nacional con el objeto de

⁴ CSJN en autos “Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa *Gil Lavedra, Ricardo y otro c/ Estado Nacional – Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios s/ amparo*”, sentencia del 14/10/2014.

que “YPF S.A. le entregara copia íntegra del acuerdo de proyecto de inversión que la sociedad había suscripto con Chevron Corporation para la explotación conjunta de hidrocarburos no convencionales en la Provincia del Neuquén”.

El voto de la mayoría ratificó la doctrina de la CSJN en materia de amplia accesibilidad al reconocer implícitamente (sin dar tratamiento alguno al tema) la legitimación del Senador que promovió la acción para reclamar la información pública que le había sido negada en sede administrativa.

Asimismo, ratificó la doctrina convencional aplicable a la materia y corroboró el criterio sentado por el tribunal en “CIPPEC c. ENA – Ministerio de Desarrollo Social”, según el cual “La información no pertenece al Estado sino que es del pueblo de la Nación Argentina” (considerando 20).

Estos criterios jurisprudenciales son lineales y concordantes a lo largo del tiempo, se encuadran en el marco convencional y constitucional en que se inscribe el derecho fundamental de acceso a información pública en nuestro contexto regional y local y, **además, recientemente han venido a quedar en gran medida reflejados en la Ley de Acceso a la Información Pública N° 27.275** aprobada con amplísimo respaldo legislativo de todo el arco político (B.O. del 29 de septiembre de 2016).

Esta norma establece que “tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública, y se funda en los siguientes principios” (conf. art. 1 Ley 27.275).

Asimismo, establece una **presunción de publicidad** para “toda la información en poder del Estado se presume pública, salvo las excepciones previstas por esta ley”, y otros principios esenciales en este campo: transparencia, máxima divulgación, informalismo, máximo acceso, apertura, disociación, no discriminación, máxima premura, gratuidad, facilitación y buena fe, entre otros.

El principio de máximo acceso quedó consagrado de la siguiente forma: “Toda persona humana o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar y recibir información pública, no pudiendo exigirse al solicitante que motive la solicitud, que acredite derecho subjetivo o interés legítimo o que cuente con patrocinio letrado” (conf. art. 4 Ley 27.275).

Igualmente, el criterio jurisprudencial de amplitud en materia de legitimación pasiva (esto es, quienes son los “*sujetos obligados*” a proveer información pública) fue receptado en el art. 7º con toda claridad, mientras que el art. 32 se ocupó de determinar que “*Los sujetos obligados enumerados en el artículo 7º de la presente ley, con excepción de los indicados en sus incisos i) y q), deberán facilitar la búsqueda y el acceso a la información pública a través de su página oficial de la red informática, de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y procurando remover toda barrera que obstaculice o dificulte su reutilización por parte de tercero*” (énfasis agregado).

Por último, es necesario subrayar lo dispuesto en el art. 18 para regular las **responsabilidades por incumplimiento de los sujetos obligados a brindar la información aquí requerida**: “*El funcionario público o agente responsable que en forma arbitraria obstruya el acceso del solicitante a la información pública requerida, o la suministre en forma incompleta u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta ley, incurre en falta grave sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, patrimoniales y penales que pudieran caberle*”.

9. PRUEBA:

9.1. Poder en favor de Eduardo Manuel Murúa y copia de DNI.

9.2. Columna Clarín titulada “*Qué podría pedir el FMI para prestarle plata a la Argentina*”.

9.3. Entrevista al Economista Martín Redrado.

9.4. Columna Página 12 titulada “*Un anticipo de las exigencias que se vienen*”.

9.5. CNN entrevista a Alfonso Prat Gay y titula “*Qué le puede pedir el FMI a Argentina?*”.

9.6. Entrevista de Jorge Lanata a Martín Lousteau.

9.7. Columna El Cronista titulada “*Alertan que el acuerdo con el FMI traerá condiciones sobre las cuentas externas*”.

9.8. Columna de Todo Noticias (TN) titulada “*Empresarios temen que las condiciones del FMI y las altas tasas lleven a una recesión*”.

9.9. La Política Online entrevista al Economista Martín Guzmán titulada “*La salida que se eligió para la corrida profundiza los problemas*”.

9.10. Columna Infobae titulada “*Cuáles serían las condiciones del FMI para prestar USD 30.000 millones*”.

9.11. Sitio web UDAP donde se encuentra subido un resumen oficial del Poder Ejecutivo sobre el acuerdo firmado.

9.12. Columna La Nación titulada “*Cronología de un programa gestado bajo extrema presión*”.

9.13. Sitio oficial del FMI que anuncia un acuerdo con Argentina para un acuerdo Stand By de tres años por USD 50.000 millones.

10. SOLICITA SE DECLARE LA CUESTION COMO DE PURO DERECHO:

Solicitamos que la cuestión aquí planteada **sea resuelta como de puro derecho**, en tanto y en cuanto únicamente habrá que producir prueba documental para entrar a resolver sobre la normativa aplicable (conf. art. 359 CPCCN).

11. AUTORIZACIONES:

Autorizamos a las siguientes personas en forma indistinta para realizar toda diligencia procesal que no requiera necesariamente la intervención de esta parte o su letrado patrocinante: Paula Carolina Lico DNI 27.439.640 y Santiago Sanchez DNI 34.866.471.

12. CASO FEDERAL:

Para el supuesto de rechazarse la pretensión de esta parte, dejamos planteada la existencia de caso federal a fin de acudir eventualmente a la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía del recurso extraordinario previsto en el art. 14 de la ley 48 por violación de los arts. 16, 18 y 75 inc. 22° de la Constitución Nacional, así como también de la jurisprudencia interamericana invocada, cuya inaplicación en el caso puede dar lugar a responsabilidades internacionales en cabeza del Estado Argentino.

13. PETITORIO:

Por todo lo expuesto, a V.S. solicitamos:

(1) Me tenga por presentado en el carácter invocado, por parte y por constituido el domicilio procesal indicado.

(2) Tenga presente la prueba ofrecida y el caso federal planteado.

(3) Otorgue las autorizaciones conferidas.

(4) Ordene correr traslado de la demanda y, oportunamente, condene a la demandada a proveer la información pública requerida en forma clara, completa, veraz y oportuna como lo exigen los estándares internacionales en la materia, la jurisprudencia de la CSJN y nuestra Ley N° 27.275.

Proveer de conformidad

SERA JUSTICIA